



## Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. [Adaptación.](#)

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

**Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material.

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.

### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.



**NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

# **La Responsabilidad extracontractual del Estado por la dilación indebida en la administración de justicia en los casos judiciales estudio 2014– 2020.**

Jaime Esteban Montaña Castro

Universidad Católica de Colombia

## **Resumen**

El presente artículo realiza un análisis sobre la Responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, concretamente desde un acercamiento a la falla en el servicio en los casos de administración de Justicia, cuando se evidencia una dilación injustificada de la autoridad judicial. Lo anterior a partir de una revisión doctrinal y jurisprudencial desde de las decisiones proferidas por el Consejo de Estado colombiano como máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa que ha expuesto de manera amplia el tema, evidenciando que elementos deben coincidir para que se pueda hablar de la existencia de una dilación injustificada.

**Palabras Clave:** Colombia, Responsabilidad del Estado, Daño Antijurídico, Administración de Justicia, Procesos Judiciales.

## **Abstract**

This article carries out an analysis on the extra-contractual patrimonial liability of the State, specifically from an approach to failure in service in cases of administration of Justice, when an unjustified delay of the judicial or administrative authority is evidenced. The foregoing based on a doctrinal and jurisprudential review based on the decisions issued by the Colombian Council of State as the highest authority of the contentious-administrative jurisdiction that has broadly exposed the issue, showing that elements must coincide so that it can be discussed of the existence of an unjustified delay.

**Key Words:** Colombia, Responsibility of the State, Unlawful Damage, Administration of Justice, Judicial Proceedings.

## **Sumario.**

Introducción. 1. Responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y su fundamento constitucional y legal. 2. Generalidades de la responsabilidad del Estado por la administración de justicia. 3. 3. La dilación injustificada en procesos judiciales en Colombia. Conclusiones. Referencias.

## **Introducción**

Para comenzar es menester indicar que en Colombia la responsabilidad de Estado se encuentra reconocida, incluso antes de la Constitución Política de 1991. En ese sentido como lo menciona Santofimio (2017) la carta política integró dentro de su clausulado un artículo respecto de la responsabilidad del Estado en Colombia por los daños antijurídicos sufridos por personas naturales o jurídicas.

En ese sentido, es importante señalar que “se desprende la obligación del Estado colombiano de reparar los perjuicios que ha sufrido la víctima, en virtud de la protección y garantía de los derechos de los asociados” (Dávila, 2019, p.7) adicionalmente se ha expresado desde el marco jurisprudencial que dicha reparación debe ser integral, es decir que se contemplen medidas de satisfacción, restitución, indemnización, justicia y no repetición.

Precisamente, el presente artículo de investigación se enfoca en un tema relevante jurídicamente, y es precisamente aquella responsabilidad derivada de la administración de justicia, ello teniendo en cuenta que en Colombia en las actuaciones judiciales se ha identificado que se presenta una congestión notoria que es concretamente la acumulación de procesos judiciales en los despachos de la rama judicial.

En este contexto, y teniendo en cuenta que en ocasiones se observa que estos causan un daño antijurídico, este análisis es pertinente en cuanto evidenciará los criterios bajo los cuales estos retardos pueden constituirse en fallas en el servicio, siendo esto un aporte para los profesionales del derecho que en la actualidad se encuentran en una circunstancia como la mencionada. Por ello se plantea como pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo se configura la falla en el servicio por dilación injustificada en la administración de Justicia en procesos judiciales en Colombia?

Este análisis pretende generar un aporte para la sociedad, al permitir identificar cuando puede considerarse normal una demora dentro de un proceso judicial y cuando definitivamente la misma causa un daño antijurídico que el ciudadano no está en el deber de soportar, por su parte desde la academia al identificar estos presupuestos se interpreta el fenómeno y se generan iniciativas y soluciones frente a la congestión judicial.

## **Metodología**

La metodología empleada para la elaboración del presente artículo de reflexión es de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica, la cual pone bajo estudio conceptos de tipo jurídico ligados en este caso a la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y la posible y el despliegue de una función pública en la medida que estudian aspectos esenciales ligados a la administración de justicia (Agudelo, 2018).

Las fuentes utilizadas son de tipo documental y son relevantes para el tema en la medida que se desprenden de investigaciones científicas y aportes doctrinales contenidos en textos de producción intelectual relevante en los temas tratados.

### **1. Responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y su fundamento constitucional y legal.**

Al hacer referencia a la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, es necesario realizar una serie de precisiones respecto del significado de este concepto al interior de un Estado como el colombiano.

Es así, como en primer lugar al hablar de responsabilidad, se hace referencia a una obligación jurídica que surge en concreto de un deber que en este caso se encuentra a cargo del Estado o la administración, es menester señalar que este deber debe estar consagrado expresamente en la Constitución política o la Ley, y el mismo en el caso del Estado colombiano se circunscribe a “reparar o indemnizar daños”, entendiendo que debido a las dinámicas de las relaciones de la administración y el administrado es probable que se puedan producir daños, que deben ser reparados por quien los causó desde el ámbito patrimonial (Gil Botero, 2017).

Por otro lado, al hacer referencia a la noción de patrimonio, lo que implica que se debe resarcir o restaurar es el patrimonio de la persona natural o jurídica que fue lesionado en razón al daño que se causó. En este aspecto, como lo advierte López (2011) los daños causados pueden ocasionar perjuicios de tipo material que hacen referencia a aquellos de tipo económico, y también inmateriales que, si bien se circunscriben a aquellos que recaen en bienes no patrimoniales, son susceptibles de una tasación dineraria realizada por la autoridad competente.

En tercer lugar, al mencionar el termino de “extracontractual” se busca definir el origen de la relación que produjo el daño al particular, en ese sentido debe entenderse que este tipo de responsabilidad únicamente se predica en los casos en los cuales el daño sea producido en el desarrollo de actividades no contractuales o no negociales de las personas naturales o jurídicas.

Finalmente es claro que en este caso concreto el objeto de estudio se concentra en la responsabilidad que se predica de la administración o del Estado, esto es aquella responsabilidad de carácter institucional del Estado (Henao, 2015), que se explica en la medida en que el autor del daño, y por lo tanto quien tiene la obligación de indemnizar o reparar el daño es una institución del Estado.

En este sentido, como lo manifiesta Ramirez (2009) la responsabilidad del Estado de manera general nace debido a la necesidad de que se contemple un régimen específico bajo el cual el Estado responda por las acciones u omisiones que pueden llegar a afectar a un tercero, generando una seguridad jurídica en la relación entre la administración y los administrados.

Hechas las precisiones anteriores sobre la noción de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, es necesario entrar a evaluar cómo ha sido el desarrollo de esta materia en Colombia con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 y los cambios que sucedieron con la expedición de esta.

### **1.1 Noción de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en la Constitución de 1991:**

En Colombia precisamente desde la Constitución de 1991 se establece de manera precisa que la responsabilidad patrimonial del Estado se analizará desde la teoría del daño antijurídico,

como se menciona en el artículo 90 que hace referencia a que es deber del Estado responder patrimonialmente por aquellos daños antijurídicos que cause bien sea por acción o por omisión (Guarín & Rojas, 2017).

Ahora bien, es importante mencionar que para que el daño antijurídico llegue a configurarse se requieren en concreto 3 elementos, señalados previamente por el Consejo de Estado, en ese sentido, el primero de estos elementos es que la persona no tenga el deber de soportar el daño causado, el segundo elemento advierte que el daño debe ser cierto, lo que quiere decir que pueda ser apreciable materialmente, y por último se hace referencia a que el daño sea personal, es decir que su resarcimiento sea solicitado por quien padece el daño (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Exp. 22163[C.P Enrique Gil Botero]).

En esa medida sobre la noción de daño antijurídico, este se considera como aquella lesión que se causa a una persona, y puede recaer en alguno de sus bienes o menoscabar alguno de sus derechos, y que la víctima no se encuentra obligado a soportar en virtud de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, la Corte Constitucional frente al concepto de daño antijurídico ha indicado lo siguiente:

Por lo anterior, la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico desplazó entonces al concepto subjetivo de antijuridicidad de la acción, y se centró en una perspectiva más objetiva de antijuridicidad del daño. En efecto, bajo la idea de daño antijurídico se incluyó la protección constitucional, no sólo de los detrimentos causados por la actividad dolosa o culpable de la Administración pública o de sus agentes, sino también de aquellos producidos por actividades perfectamente lícitas del Estado, pero que los ciudadanos de algún modo no estaban llamados a soportar (Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-286 de 2017, [M.P Gloria Stella Ortiz Delgado]).

Dicho lo anterior, es importante acotar que dentro de los presupuestos de la Responsabilidad patrimonial extracontractual además de ser necesaria la existencia del daño antijurídico, debe contemplarse la existencia de un título jurídico de imputación, que es la forma en la cual se endilga la responsabilidad, de acuerdo con el contexto en el cual se causó.

En resumen, la responsabilidad patrimonial del Estado se fundamenta en la teoría del daño antijurídico, lo que cambia respecto de una u otra situación fáctica es el título de imputación que deberá evaluarse desde las particularidades de cada caso concreto (Flórez, 2016). Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto de estudio, se procederá a hacer una síntesis del fundamento legal de la responsabilidad del Estado por la administración de justicia.

## **2. Generalidades de la responsabilidad del Estado por la administración de justicia.**

Para comenzar, es importante advertir que el acceso a la administración de justicia se considera como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano que se encuentra consagrado de manera expresa en el artículo 229 de la Constitución Política de 1991 (Velasco y Llano, 2016). De ese modo, se prevé que la administración de justicia es el camino para efectivizar otra serie de derechos de los individuos, por lo cual los procedimientos deben estar reglados a fin de que los ciudadanos puedan acudir a esta en caso de necesitarlo.

Respecto de lo anterior, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley (Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 2011, [M.P Humberto Sierra Porto]).

En ese sentido, debe entenderse que el acceso a la administración de justicia se concreta por una parte con la posibilidad de acudir ante una autoridad judicial que resuelva un conflicto, pero esto no es suficiente; ya que para que se pueda materializar este derecho es necesario que exista una resolución de dicho conflicto, de lo contrario no se cumplirá con el fin previsto en la Constitución.

En función de lo planteado, se debe advertir que la administración de justicia puede presentar algún tipo de error o falla (Armenta, 2009), esto considerando que quienes tienen la función de realizar las actividades que enmarcan esta actividad son individuos que no están exentos de cometer algún tipo de error en las actuaciones judiciales o desplegar acciones que puedan generar un perjuicio.

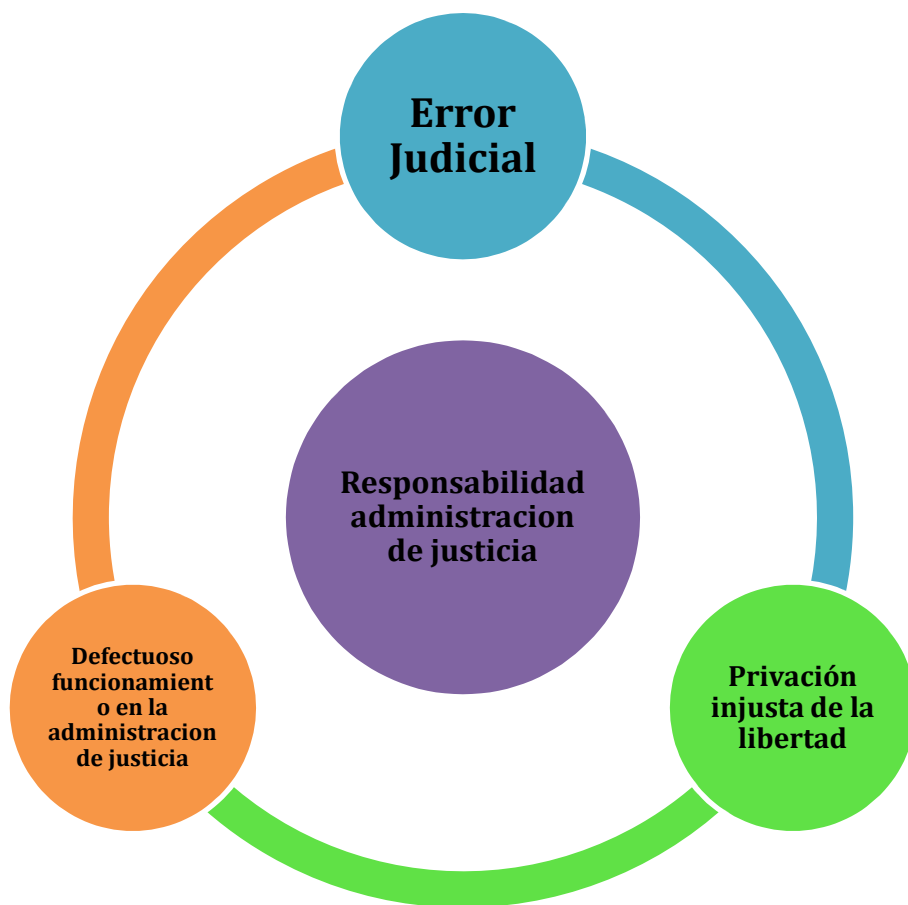
Como lo indica Merlano (2010) el fundamento legal de la Responsabilidad del Estado por la administración de justicia se desarrolló en la Ley 270 de 1996 que es en concreto la Ley estatutaria que regula esta materia en general. Dentro de dicha norma, se identifican tres presupuestos o acciones que son generadoras de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, tal como se observa a continuación.

### **2.1 Presupuestos de responsabilidad desde la Ley 270 de 1996:**

Es importante señalar que antes de la expedición de la Ley 270 de 1996 desde la jurisprudencia se habían instituido títulos de imputación en materia de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado alrededor del ejercicio de la administración de justicia (Ruiz Orjuela, 2016).

Ahora bien, con la expedición de esta norma se reconocen tres presupuestos sobre la administración de justicia bajo los cuales puede predicarse la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, los cuales se observan en la figura 1 que se muestra a continuación.





**Figura 1. Presupuestos responsabilidad patrimonial por la administración de justicia.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

En primer lugar, sobre el error jurisdiccional, el mismo se describe en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 que señala que este error es cometido por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, y dicho error debe materializarse en una providencia que es la que ocasiona el daño.

El Consejo de Estado respecto del error judicial ha mencionado lo siguiente:

(...) el error jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”. Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado

hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Los “recursos de ley” deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional (Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Exp. 63541, 2019 [M.P Guillermo Sánchez Luque]).

En ese orden de ideas, se puede observar que el error judicial se fundamenta en un error que nace del actuar de la autoridad jurisdiccional exclusivamente, y cuya actuación esta notoriamente desviada de la norma que regula el procedimiento o la valoración que se realizó dentro del proceso no responde a la realidad, sin embargo es menester indicar que la autonomía de los jueces protege la interpretación que se realice en los procesos judiciales, por ello la simple interpretación de la Ley no da lugar al error judicial.

En ese sentido, Quintero (2020) señala que el ámbito de la responsabilidad por error judicial no constituye como tal una instancia adicional para revisar una providencia, por el contrario, es una acción que busca que se repare un daño sufrido debido a la actuación arbitraria de un funcionario investido de la facultad jurisdiccional, por ello este debe estar plenamente acreditado en el marco de la acción de reparación directa.

En segundo lugar, en el marco de la administración de justicia se reconoce como un presupuesto de la responsabilidad la privación injusta de la libertad como lo expresa Royero (2018) busca que prime en todos los casos el derecho a la libertad de los individuos y que las restricciones que se impongan en todos los casos respondan a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Concretamente en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se hace referencia a que toda persona que sea privada de la libertad injustamente podrá solicitar la reparación de los perjuicios causados por este hecho. Precisamente, respecto del derecho a la libertad personal y su importancia, la Corte Constitucional ha mencionado lo siguiente:

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la libertad personal como la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de

limitación de la autonomía de la persona. En ese sentido, se trata de un presupuesto para el ejercicio de las demás libertades y derechos, pues la detención supone la restricción de las otras prerrogativas de las cuales la persona es titular (Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 2019, [M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado]).

En razón a la importancia del derecho fundamental a la libertad personal, es deber del Estado proteger a los ciudadanos de las detenciones arbitrarias que pongan en riesgo la materialización de este derecho sin una justificación legal, por ello en los casos que se observe que existieron actuaciones de una entidad estatal que llevaron a que se privara a una persona injustamente de la libertad, habrá lugar al reconocimiento de la responsabilidad del Estado.

Tejada (2017) señala respecto de lo anterior que la privación injusta de la libertad se configura en el momento en que dentro de un proceso penal en el cual la Fiscalía general de la Nación solicitó una medida restrictiva de la libertad que fue impuesta por la Rama Judicial no se logra terminar con una sentencia condenatoria, lo que indica que el Estado deberá responder por los perjuicios que sufrió la persona que estuvo privada de la libertad.

Respecto de este título de imputación, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia – con fundamento en el principio *iura novit curia*–, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás hipótesis que desborden ese concreto y particular marco conceptual deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal (Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Exp. 40.060 de 2014 [C.P Enrique Gil Botero]).

Como se logra evidenciar del pronunciamiento del Consejo de Estado la privación injusta de la libertad puede producirse por una falla en el servicio o un daño especial, ello dependerá concretamente de las circunstancias en que se efectúe tanto la privación de la libertad como

el proceso penal que termina en una sentencia absolutoria, dicho esto se evaluará el último presupuesto sobre la defectuosa administración de justicia.

En tercer lugar, se ha reconocido como presupuesto de la responsabilidad del Estado derivada de la administración de justicia, el defectuoso funcionamiento de esta. En esa medida, como lo advierte Mora y Rivera (2019) este presupuesto se deriva de actividades conexas o auxiliares a la administración de justicia, es decir a aquellas actividades que se despliegan alrededor del proceso judicial que no son concretamente la decisión del asunto.

La jurisprudencia del Consejo de Estado señala sobre el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia:

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales –distintas a la expedición de providencias– necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas. Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales (Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub Sección A, Sentencia Exp. 36634, 2015, [C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera]).

Es claro entonces que dentro de este presupuesto caben todas aquellas acciones que se hayan desplegado en el marco de la actividad judicial causando un daño a una persona el cual deberá ser plenamente acreditado, así lo señala concretamente el artículo 69 de la Ley 270 de 1996.

Precisamente dentro de la defectuosa administración de justicia se encuentra la mora injustificada en los procesos judiciales como se observará a continuación.

### **3. La dilación injustificada en procesos judiciales en Colombia.**

Para iniciar, es menester indicar que la Constitución Política de Colombia de 1991, establece como se mencionó anteriormente el derecho a la administración de justicia efectiva y pronta, sin ningún tipo de dilación injustificada (Herrán, 2018). Dicha situación que precisamente se complementa con la disposición de orden constitucional del artículo 228 de esta misma carta que señala que los términos procesales deben ser observados con diligencia por las autoridades estatales y su incumplimiento deberá tener una sanción.

Lo anterior, también tiene fundamento con la legislación de orden internacional específicamente con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos que señala en las garantías judiciales, el derecho al plazo razonable.

Este presupuesto, hace referencia concretamente a que una persona no puede estar sometida a un proceso o investigación de manera indefinida, en consecuencia, los ordenamientos jurídicos de los Estados partes de la convención deben fijar términos para las etapas procesales limitados en el tiempo y adicional considerar las figuras de prescripción y caducidad de la acción (Pastor, 2004).

En esa medida, como señala Perilla (2020) en Colombia si bien no se reconoce la dilación injustificada o la mora judicial por el incumplimiento a los términos procesales per se, ya que debido a la congestión judicial en Colombia dicha situación se imposibilita en muchos casos, por ello cada caso deberá ser objeto de revisión.

Sobre la mora judicial, la Corte Constitucional ha advertido que la mora judicial es un fenómeno que puede atribuirse a diversas causas, sin embargo, es enfática en señalar que la existencia o configuración de esta impide que existe una materialización efectiva del derecho a la administración de justicia. No obstante, es una situación que desborda la capacidad de los funcionarios judiciales quienes ven desbordadas sus capacidades por la carga laboral (Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017, [M.P María Victoria Calle Correa]).

Ahora bien, en el marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, como lo menciona Trujillo (2009) en el caso de que el afectado pueda demostrar que la mora judicial o la dilación injustificada le causaron un perjuicio, podrá acudir a la jurisdicción

contencioso-administrativa para a través de una acción de reparación directa reclamar que se declare patrimonialmente responsable al Estado.

A continuación, se evaluarán las circunstancias bajo las cuales el Consejo de Estado colombiano ha reconocido la existencia de una falla en el servicio por mora judicial, y en cuales casos por el contrario considera que esta justificada la dilación que se presenta dentro del proceso judicial.

### **3.1 El concepto de mora judicial desde la jurisprudencia del Consejo de Estado:**

Para comenzar es importante señalar que los términos de los procesos judiciales se encuentran previamente reglados por el legislador. Lo anterior, en el marco de los parámetros del derecho al debido proceso, que advierte de la importancia de que los procesos sean públicos y además no se incurra en dilaciones injustificadas.

Como señala Alarcón (2014) en el marco de los procesos judiciales es esencial que se de una aplicación integral al principio de celeridad, y en esa medida se logre el acceso efectivo a la administración de justicia. En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado ha mencionado lo siguiente:

El principio de celeridad, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, además de ser uno de los más importantes para el ejercicio de la función judicial, es parte del derecho al debido proceso, pues éste “se encuentra en armonía con el derecho a que se administre pronta y cumplida justicia”, por lo que, los funcionarios judiciales están obligados a evitar la dilación injustificada de los procesos. Por eso, ha dicho la Corte, “la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente” entre otras, porque esa circunstancia atenta contra la seguridad jurídica a que tienen derecho los asociados (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 22650, 2002, [M.P Alier Eduardo Hernandez Enríquez]).

Se colige de lo anterior, la necesidad de que los administradores de justicia cumplan con los términos previstos para los procesos judiciales, y en el caso en que no se cumplen que la demora no sea imputable como tal al operador jurídico. En esa medida, no puede perderse de

vista que es el Juez quien debe dar impulso al proceso judicial a través de las providencias que profiera.

Respecto de lo anterior, Perilla (2020) afirma que el simple transcurso del tiempo presentado en un proceso judicial no es por si mismo una falla en el servicio, lo anterior, teniendo en cuenta que la demora presentada puede estar debidamente justificada y motivada en un hecho externo o incluso de las partes procesales.

Coincide en lo anterior, el Consejo de Estado que señala respecto de la falla en el servicio por mora judicial lo siguiente:

(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es celer y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Exp. 02547, 2014, [M.P. Martha Teresa Briceño De Valencia]).

Es claro conforme a lo anterior que en el caso de que la inobservancia a procesos judiciales tenga una motivación razonable, no se considerará que existe una falla en el servicio por parte del juez que administra justicia.

Precisó en su momento el Consejo de Estado que el retardo injustificado o la mora judicial será una causa de responsabilidad patrimonial Extracontractual del Estado, solo si el actor logra probar que dicha dilación injustificada causo un daños antijurídico, al haberse denegado el acceso a la administración de justicia (Consejo de Estado, Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 35497, 2015, [M.P Carlos Alberto Zambrano Barrera]).

Ahora bien, en el caso de que la mora judicial se produzca por la negligencia de los administradores de justicia, y por esta razón se produzca un daño en el ámbito patrimonial o moral de una persona, cuyos perjuicios puedan ser probados, podrá considerarse la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado.

Precisamente, en el marco de lo anterior el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia ha indicado que la mora presentada dentro de un proceso judicial se encuentra justificada en tres casos concretos, el primero de ellos cuando se deba a la complejidad del asunto que se esta tratando, y pese a la diligencia del operador juridico no sea posible cumplir los términos previstos en la norma. En segundo lugar, cuando se evidencia que existe una desmedida carga laboral y por último cuando se observen circunstancias externas que impidan que se dicte una decisión de fondo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 00842, 2021, [M.P Carlos Enrique Moreno Rubio]).

Ejemplo de ello, es la siguiente providencia en la cual si bien el Consejo de Estado advierte que existe una mora judicial o inobservancia a los términos previstos para la acción penal, también advierte que la misma tiene una justificación:

La responsabilidad del Estado derivada de la mora judicial debe dilucidarse luego de analizar la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes, la forma como se llevó el caso, el volumen de trabajo del despacho que tramitó el negocio y los estándares de funcionamiento de las autoridades judiciales, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos, como aquel que sirve de fundamento a las pretensiones del presente asunto, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión y no desde la óptica de un Estado ideal (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 49317, 2020, [M.P José Roberto Sáchica Méndez]).

Como se evidencia son muchos los factores que deben evaluarse a fin de determinar si existió realmente una negligencia por parte del ente judicial que causó la mora judicial, ya que ello no puede predicarse de facto en todos los casos en los cuales no se observen con exactitud los términos judiciales.

Por otra parte, esta corporación también ha advertido aquellas circunstancias en las cuales la mora judicial se considera como injustificada, ello es en primer lugar cuando exista un incumplimiento en los términos previstos en la norma para que se adelante una actuación por el funcionario competente. Así mismo, no se encontrará justificada la mora judicial cuando



se exceda el plazo razonable que involucren las características propias del proceso, por ultimo se considera por parte del Consejo de Estado que no exista falta motivo o justificación razonable del retraso que se presentó (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 00842, 2021, [M.P Carlos Enrique Moreno Rubio]).

Por ejemplo, el Consejo de Estado en el siguiente caso reconoce que debido a la mora judicial en la que incurrió un juzgado penal, el demandante perdió de la oportunidad de reclamar una indemnización a la cual tenía derecho y en consecuencia señalo:

La Sala concluye que el daño padecido por el señor (...) le resulta imputable a la Rama Judicial a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora judicial injustificada, toda vez que en el sub lite no se probaron las circunstancias que dieron lugar a que el proceso penal estuviera por más de cinco años después de la resolución de acusación, sin que se hubiese emitido la sentencia de primera instancia, lo cual devino en la prescripción de la acción penal, declarada por el Tribunal Superior de Valledupar, en sede de apelación (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A, Exp. 46603, 2021, [M.P Marta Nubia Velásquez Rico]).

Como se observa, en la situación anterior el juzgado no logró justificar la mora judicial que se presentó dentro del proceso penal. En consecuencia, por la mora presentada prescribió la acción penal y se privó al demandante de la oportunidad de recibir una indemnización al ser víctima de la conducta punible de estafa.

Hecho el análisis anterior de casos concretos es posible señalar que la dilación o mora injustificada es una situación que debe analizarse conforme a los presupuestos de cada caso particular, para de este modo visualizar si existe algún tipo de justificación sobre la inobservancia de los términos presentados, adicionalmente se debe evaluar si realmente se causo algún tipo de daño que pueda ser imputable en este caso a quien administra justicia.

## **Conclusiones**

Como respuesta a la pregunta de investigación se debe indicar que la falla del servicio por dilación injustificada en los procesos judiciales se configura en el momento en el cual existe una inobservancia a los términos procesales definidos por la norma procesal sin justificación alguna, causando un daño a una persona natural o jurídica que pueda acreditarse.

Así entonces, existe dilación injustificada o mora judicial por la prolongación en el tiempo de un asunto judicial que resulta anormal a la luz del procedimiento previsto para el proceso sometido a consideración del juez.

Pero se debe ir más allá, en la medida que la inobservancia a los términos puede ser a causa de diversos factores, en ese sentido, es necesario advertir que en Colombia existe una notoria congestión en el ámbito judicial, que genera una carga laboral excesiva en los despachos judiciales que no permite que los procesos puedan ser definidos en el término que esta previsto por el legislador para ello.

No obstante, lo anterior, es preciso indicar que no toda la dilación que se presente en los procesos tiene que ser soportada por las partes del proceso, ya que pueden existir casos en los cuales no exista una causa a la cual pueda atribuirse la demora o inobservancia a los términos, y de ello se derive la causación de un daño.

Así entonces, en el escenario anterior es posible que se logre configurar la existencia de una falla en el servicio, demostrando que el daño tiene un nexo causal con la dilación injustificada en la cual incurrió el administrador de justicia, sin que este pueda demostrar que la mora fue a causa de alguna circunstancia externa que no es imputable a este como funcionario de la rama judicial.

Es claro a partir de lo expuesto anteriormente un punto central en la evaluación de la configuración de falla en el servicio por dilación injustificada en procesos judiciales es la existencia o no de una justificación de la demora presentada en el curso del caso sometido a conocimiento del ente judicial.

En el caso colombiano particularmente existen situaciones que hacen que los procesos judiciales tomen más tiempo de lo previsto para una decisión por parte del Juez que tiene el caso en cuestión. Ejemplo de las situaciones anteriores son la carga laboral debido a la

congestión presentada, el traslado de despachos judiciales, la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, entre otras que son realmente causas externas que afectan el curso normal de un proceso judicial sin que esto constituya un incumplimiento a las funciones asignadas al juez.

### **Referencias**

Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Alarcón Peña, A. (2002). El debido proceso como derecho fundamental. *Iter Ad Veritatem*, 2(2).

Armenta, A. M. (2009). El régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia: El título jurídico de la imputación. *Revista vía iuris*, (6), 88-112.

Dávila Acevedo, O. L. (2019). Análisis Jurisprudencial del Consejo de Estado de los riesgos de responsabilidad patrimonial extracontractual por actividades médico sanitarias en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia.

Flórez Acero, G. D. (2016). Reseña: la responsabilidad del estado por la utilización de las tecnologías de información y comunicación TIC. *Novum Jus*, 10(2), 119-124. Recuperado a partir de <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/1324>

Gil Botero, E. (2017). Responsabilidad extracontractual del Estado (7th ed.). Bogotá: Temis.

Guarín, E., y Rojas, A. (2017). La medida de la solidaridad: Responsabilidad del Estado y derecho de los asociados (1st ed.). Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Henao, J. C. (2015). Formas de Reparacion en la Responsabilidad del Estado: Hacia su Unificación Sustancial en Todas las Acciones contra el Estado, *Las. Rev. Derecho Privado*, 28, 277.

Herrán Pinzón, O. (2013). El alcance de los principios de la administración de justicia frente a la descongestión judicial en Colombia. *Prolegómenos. Derechos y Valores*, XVI (32), 105-122. ISSN: 0121-182X.

López-Martínez, M. A. (2011). Examen general de los alcances de la responsabilidad patrimonial del Estado en la política pública de desplazamiento forzado. *Estudios Socio-Jurídicos*, 13(1), 451-487.

Merlano, J. E. (2010). La responsabilidad jurídica de abogados y administradores de justicia en el derecho colombiano. *Revista de derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte*, (33), 96-120.

Mora, E., & Rivera, A. (2019). *Derecho administrativo y procesal administrativo* (11th ed.). Bogotá: Editorial Leyer.

Perilla, J. S. A. (2020). Las dilaciones indebidas como institución jurídica transmutada desde el misreading colombiano. *Justicia*, 25(37), 247-264.

Quintero-Álvarez, P. (2020). El error del operador judicial en Colombia. *Nuevo Derecho*; 16(26): 1-21

Ramirez, E. L. (2009). La inoperante aplicación del nexo de causalidad en d en la responsabilidad civil del Estado. *Administración & Desarrollo*, 37(51), 161-174.

Royero, L. V. (2018). La responsabilidad objetiva como criterio de valoración en los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad. *Vis Iuris. Revista de derecho y ciencias sociales*, 139-159.

Ruiz Orjuela, W. (2016). *Responsabilidad del Estado y sus regímenes* (3ra ed.). Ecoe Ediciones.

Santofimio, J. (2017). *Compendio de Derecho administrativo* (1st ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Tejada González, M. C. (2017). Responsabilidad objetiva y subjetiva del Estado por privación injusta de la libertad. *Revista Jurídica Piélagus*, 16(1), 89-99. <https://doi.org/10.25054/16576799.1447>

Trujillo, M. (2009). La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia Constitucional. *Revista Derecho Del Estado*, (23), 67-88. Recuperado a partir de <https://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/468>

Velasco Cano, N., & Llano, J. V. (2016). Derechos fundamentales: un debate desde la argumentación jurídica el garantismo y el comunitarismo. *Novum Jus*, 10(2), 35-55. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2016.10.2.2>

### **Jurisprudencia**

Corte Constitucional colombiana. (2011). Sentencia T-799 de octubre 21. M.P Humberto Sierra Porto.

Corte Constitucional colombiana. (2017). Sentencia C-286 de mayo 3. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.

Corte Constitucional colombiana. (2017). Sentencia T-186 de marzo 28. M.P María Victoria Calle Correa

Corte Constitucional colombiana. (2019). Sentencia C-276 de junio 19. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.